

NURIA DEL VISO

Afganistán: guerras asimétricas, víctimas civiles

En un debate abierto celebrado en junio pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU advertía de nuevo sobre el creciente impacto de los conflictos armados en la población civil, el personal humanitario y los periodistas.¹ Actualmente, los civiles son las principales víctimas de los enfrentamientos. Tanto los ataques hacia ellos como su desplazamiento forzado están explícitamente prohibidos por las Convenciones de Ginebra, y constituyen crímenes de guerra tipificados por el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, en países como Afganistán la población civil se ha convertido en los últimos años en el principal blanco de los combates.

Los civiles no sólo sufren las repercusiones de las hostilidades como receptores pasivos de “efectos colaterales” sino que, en ocasiones, son el objetivo deliberado de los ataques. Los conflictos actuales, por sus propias características y la naturaleza de sus actores, muestran un bajo respeto por las normas de la guerra y la integridad de la población civil. Muchos de sus actores son Estados en colapso y grupos insurgentes, pequeños, poco estructurados y con baja formación, cuyo objetivo es causar el mayor daño al menor coste. En tales condiciones, los civiles se convierten en un blanco fácil. Además, desde el anuncio de la “guerra global contra el terrorismo” en 2001 y el inicio de operaciones de estabilización más enérgicas, se observa que ciertos Estados que participan en conflictos también han rebajado el respeto por las normas internacionales, y sus acciones han ocasionado graves daños a la población civil.

Uno de los países donde el conflicto está afectando con más crudeza a los civiles es Afganistán. Allí éstos se encuentran atrapados en medio de las hostilidades que se desarrollan entre, los talibanes por un lado, el principal grupo

Nuria del Viso es investigadora del Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial)

¹ SC/9057, de 22 de junio de 2007.

de la insurgencia, y, por otro, las tropas internacionales compuestas por la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), bajo el mando de la OTAN y avalada por la ONU, y la Coalición Libertad Duradera, liderada por EEUU. Sin embargo, el conflicto armado no es la única fuente de inseguridad para los afganos: la extrema pobreza, la fragilidad del Estado, la omnipresente corrupción y la amplia penetración del narcotráfico en la economía sirven de caldo de cultivo para el aumento de las actividades criminales.

“Efectos colaterales” y escudos humanos

En los dos últimos años, el conflicto armado en Afganistán se ha agravado de forma alarmante. Estrategias equivocadas de las operaciones internacionales, en combinación con el resurgimiento de los talibanes, están en el origen del recrudecimiento de los combates y los atentados terroristas. A medida que se han intensificado los enfrentamientos, han crecido de forma paralela las víctimas civiles por acciones de las dos partes. Éste es, sin duda, el peor año: entre enero y agosto de 2007 han muerto unos 900 civiles, según estimaciones de la ONU. Agosto fue el mes en que se produjeron más muertes, 168. Muchas de las víctimas han perdido la vida a causa de los numerosos bombardeos de la Coalición Libertad Duradera, sobre todo, y de la OTAN. El uso de los ataques aéreos es un medio cada vez más utilizado en Afganistán –más frecuente aún que en Irak–. Con él se pretende, por un lado, minimizar las propias bajas y, por otro, suplir el insuficiente nivel de tropas internacionales (hay algo más de 40.000 soldados en un país de más de 650.000 kilómetros cuadrados).

La multiplicación de las víctimas civiles ha suscitado una oleada de protestas en la comunidad internacional. La muerte de varios niños como resultado de las bombas de EEUU sobre una escuela coránica causó especial estupor. El Secretario General de la ONU, organizaciones de derechos humanos, el Gobierno afgano e incluso algunos gobiernos participantes en el contingente internacional –como España y Alemania– han condenado el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. La OTAN ha pedido disculpas y ha prometido reorientar sus tácticas; por otro lado, EEUU ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha ofrecido compensaciones, pero rechaza asumir su responsabilidad y alega que ésta recae en los insurgentes por utilizar a la población civil como escudos humanos. El Ejército afgano y las tropas internacionales han acordado utilizar bombas más pequeñas para minimizar los daños, pero es dudoso que esta medida por sí sola pueda reducir las víctimas civiles.

La coordinación del contingente internacional, o más bien la falta de coordinación, se ha convertido en un tema controvertido. Las actuaciones de EEUU en las zonas de responsabilidad de los aliados sin tan siquiera informarles previamente de sus acciones han provocado la protesta oficial de varios países. Estos incidentes ponen de relieve uno de los pun-

tos débiles de la misión internacional en Afganistán: su descoordinación. A su vez, ilustran las diferentes sensibilidades y enfoques que existen a ambos lados del Atlántico respecto a los objetivos y métodos de la misión.

Pese a las buenas palabras de los discursos oficiales y una estrategia internacional que pretende centrarse en “ganar los corazones y las mentes” de los afganos, los bombardeos continúan y aumentan las víctimas. El creciente número de muertes de civiles se convierte, además, en un arma arrojada en manos de la insurgencia, que aprovecha los errores de las fuerzas internacionales y la indignación de los afganos para favorecer su propia causa.

La táctica de los insurgentes de refugiarse en poblaciones y mezclarse con sus habitantes o provocar que los combates se produzcan dentro de las aldeas ocasiona graves daños para los civiles, que se convierten en escudos involuntarios frente a las tropas internacionales. Es habitual el allanamiento de viviendas por parte de las fuerzas internacionales y la detención de sospechosos que, en muchas ocasiones, nada tienen que ver con la insurgencia. Existe, además, el riesgo añadido de tortura durante el periodo de detención, bien a manos de las fuerzas de seguridad afganas o bien de las estadounidenses, como indican numerosos testimonios.

El significativo desequilibrio de poder entre las partes en combate ha llevado a la insurgencia a la utilización, cada vez más frecuente, de tácticas terroristas experimentadas con éxito en Irak: atentados suicidas y artefactos explosivos improvisados colocados en las carreteras. Aunque los ataques están dirigidos contra representantes internacionales o de las fuerzas de seguridad afganas, muchas veces los civiles acaban sufriendo los mayores daños. Además, la población afgana se ha convertido en objetivo de las acciones terroristas. Numerosos supervivientes de atentados han señalado la ausencia de tropas internacionales o afganas, o de otros representantes del Gobierno o la comunidad internacional, en el momento de producirse la agresión. La elección de lugares concurridos, como mercados o zonas de tránsito intenso, indica la intención de los insurgentes de atentar específicamente contra la población civil. La organización Human Rights Watch estima que en 2006 murieron cerca de 800 afganos en atentados suicidas o como víctimas de artefactos explosivos.² Como señala el Gobierno afgano, los talibanes vuelven a recurrir a las minas antipersona, que se cobran cientos de vidas entre la población. Aunque la mayoría de los ataques se concentran en el sur, donde el movimiento talibán tienen sus bases, cada vez se producen más incidentes en otras zonas del país, hasta ahora consideradas seguras.

² Human Rights Watch, *The Human Cost: The Consequences of Insurgent Attacks in Afghanistan*, 16 de abril de 2007.

Ataques a objetivos “blandos”

Los talibanes han emitido una *fatwa* que ordena dar muerte a cualquier persona que de alguna forma colabore con la intervención internacional.³ Entre ellas se encuentran trabajadores humanitarios, activistas de derechos humanos, funcionarios del Gobierno, ingenieros y periodistas, especialmente las mujeres. Para controlar a la población a través del terror, en comunidades pequeñas los talibanes emplean las llamadas “cartas nocturnas” –que contienen amenazas de muerte– y las ejecuciones ejemplarizantes de *mulás*, jefes tribales moderados y todo aquél que se considera diferente y que se tilda de colaborador o de espía.

El significativo desequilibrio de poder entre las partes en combate ha llevado a la insurgencia a la utilización de tácticas terroristas experimentadas con éxito en Irak

La educación y los educadores se han convertido en uno de los blancos más frecuentes de los ataques insurgentes, que han destruido en los últimos años unas 400 escuelas y han asesinado tanto a profesores como a alumnos, sobre todo niñas. El libro de normas de la lucha talibán, el *Laheya*, admite expresamente el apaleamiento de los docentes que ignoren las advertencias y continúen enseñando. Si persisten en su actitud y siguen impartiendo enseñanzas contrarias a los principios del islam, el libro sanciona su asesinato. Se calcula que unos 300.000 estudiantes han abandonado las aulas por la creciente inseguridad. Durante el nuevo curso escolar en las provincias del sur, al menos 350 escuelas permanecerán cerradas debido a la falta de seguridad. De las 224 escuelas que funcionaban en la provincia de Helmand en 2003, este septiembre solo abrieron sus puertas 90. La falta de acceso a la educación se resuelve, en algunas ocasiones, con soluciones ingeniosas como la organización de clases de alfabetización dentro del hogar entre grupos de vecinos.

El incremento de la violencia hace cada vez más difícil el trabajo de las organizaciones humanitarias. Muchas ONG internacionales han cesado sus actividades en el sur ante la imposibilidad de llevar a cabo sus proyectos por el aumento de los riesgos para su personal. Después de una cadena de secuestros y ejecuciones de cooperantes, el Ministerio de Interior afgano ha emitido una orden que impide a los trabajadores humanitarios extranjeros –a excepción de los trabajadores de la ONU– viajar fuera de Kabul si no están acompañados de fuerzas de seguridad privadas. La orden encarece y dificulta las actividades de las ONG, especialmente los proyectos en zonas rurales. Como indica un responsable de Cruz

³ Amnistía Internacional, *All who are not friends, are enemies: Taliban abuses against civilians*, 19 de abril de 2007. En <http://web.amnesty.org/library/index/engasa110012007>

Roja Internacional en Afganistán, “el espacio humanitario se va reduciendo, mientras que crece la radicalización de las partes combatientes”.

El secuestro y liberación parcial de 23 voluntarios surcoreanos el pasado agosto anuncia una nueva pauta de la acción insurgente con gran potencial para influir en las organizaciones de ayuda. La liberación de algunos de los rehenes se obtuvo después de que los oficiales surcoreanos negociaran directamente con los representantes talibanes, lo que, en opinión de algunos analistas, aumenta el estatus de los insurgentes. Además, la liberación se obtuvo sólo después de que los negociadores accedieran a las exigencias políticas de la insurgencia: que el Gobierno surcoreano retire sus tropas de Afganistán –algo que Seúl ya barajaba pero que sólo ahora ha decidido– y que cese el flujo de voluntarios cristianos. A través del ataque contra los trabajadores humanitarios, los talibanes han logrado un doble objetivo: doblegar a un Gobierno para que retire sus tropas e instigar el sentido de inseguridad en todo el país, con el que pretenden minar al Gobierno de Kabul. El éxito de esta acción alienta al grupo a utilizar la misma estrategia con otros países.

En un contexto en el que los gobiernos occidentales y los responsables de la OTAN han reconocido que no existe una solución puramente militar a los problemas de Afganistán, y cuando la reconstrucción del país aparece más que nunca como pieza estratégica para su pacificación, la reducción del área de acción de las ONG y, en muchos casos, su retirada de zonas inseguras representa un peligro añadido a los retos con que se enfrenta el país y, ciertamente, un método seguro para mantener a éste en la pobreza. Las ONG alegan que su trabajo también se ha complicado por la presencia de los Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT, por sus siglas en inglés), híbridos civiles-militares impulsados por la comunidad internacional para promover la reconstrucción. Según las organizaciones, los PRT desvirtúan los principios de la acción humanitaria de imparcialidad y neutralidad, por lo que la población local establece un nexo entre dicha acción humanitaria y los ejércitos invasores.

Refugiados, desplazados e infancia

Los enfrentamientos y los bombardeos están produciendo un aumento del desplazamiento interno. La ONU estima que, hasta el momento, unas 80.000 personas han tenido que abandonar sus hogares a causa del conflicto armado, pero estas cifras se pueden disparar si se agravan las hostilidades. Los campos de acogida en las provincias del sur carecen de acceso a agua potable y servicios básicos de salud y educación, además de enfrentar la escasez de alimentos y la ausencia de empleo. Para agravar la situación, dos países vecinos –Irán y Pakistán– han decidido simultáneamente expulsar a miles de refugiados de su territorio.

Irán comenzó en abril un plan forzado de expulsiones de trabajadores ilegales que ha enviado de vuelta a Afganistán a unas 120.000 personas que hoy se hacen en campos de acogida en el oeste del país. Esta decisión se ha interpretado como un aviso a EEUU sobre la capacidad de Irán para crear problemas en suelo afgano sin tan siquiera infringir la legalidad internacional. En Irán están registrados unos 920.000 afganos, aunque se calcula que un millón más residen de forma ilegal.

Por otro lado, Pakistán ha ordenado el cierre de cuatro campos de refugiados que han alojado durante décadas a los afganos que huían del conflicto en su país. Los 86 campos existentes acogen a cerca de la mitad de los dos millones de refugiados registrados. Estos lugares se han convertido en auténticas ciudades con acceso a servicios básicos. Sólo en el campo de Jalozai, uno de los que serán clausurados en 2008, residen alrededor de 100.000 personas.

El Gobierno paquistaní alega razones de seguridad para el cierre. Argumenta que la mayor parte de los terroristas suicidas y combatientes que se introducen en Afganistán para alimentar las filas de la insurgencia proceden precisamente de los campos de refugiados. Sin embargo, para muchos afganos la expulsión representa una quiebra en sus vidas. En torno a una cuarta parte de los refugiados son menores de 28 años y nacidos en Pakistán, por lo que tienen muy pocos vínculos con su país de origen. Buena parte de los expulsados de Irán y Pakistán proceden de las provincias del sur de Afganistán, zona "caliente" de las hostilidades. Los retornados se enfrentan al desempleo y la ausencia de medios de vida, así como a la falta de servicios e infraestructuras agrícolas. En un país donde los derechos de propiedad de la tierra carecen de un sistema legal que los respalde, la vuelta a las tierras que se dejaron significa en muchas ocasiones encontrarlas ocupadas por otros propietarios. Además, el peligro de verse inmersos en los enfrentamientos o convertirse en víctimas de ataques terroristas es otra amenaza para los retornados. Según un reciente estudio del Gobierno paquistaní y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 82% de los afganos registrados en Pakistán se resiste a volver en el futuro inmediato.

La comunidad internacional ha promovido la política de repatriaciones como parte integral de su plan de reconstrucción del país. Desde 2002 han vuelto a Afganistán más de 4,5 millones de afganos. Las altas cifras de retorno se han interpretado como una de las claves del éxito de la nueva etapa. Sin embargo, a medida que las expectativas de recuperación creadas por la comunidad internacional se diluyen y aumenta la inseguridad derivada de la insurgencia, el narcotráfico y la delincuencia, muchos de los retornados abandonan de nuevo Afganistán para ganarse la vida en los países vecinos. En 2006 el retorno voluntario registró un descenso del 60%.

Irán y Pakistán han soportado el peso de la diáspora afgana durante décadas y han acogido a millones sin recibir ningún apoyo internacional. No obstante, los acelerados planes de retorno amenazan con desatar una nueva crisis humanitaria en Afganistán, cuyo Gobierno no tiene capacidad para realojar y prestar servicios al número de refugiados señalados para el retorno obligatorio.

Tres décadas de conflicto armado han erosionado los mecanismos comunitarios de resolución de conflictos y los sistemas de gestión de los recursos naturales. El aumento repentino y concentrado de habitantes ha acrecentado la presión sobre unos recursos escasos en un medio ambiente muy frágil. Conflicto, desplazamiento interno y desgobierno, combinados con una sequía continuada y la mala utilización de los recursos naturales, han conducido a una deforestación acelerada –se estima que Afganistán ha perdido el 70% de la superficie de bosques en las dos últimas décadas– y a la erosión del suelo, que a su vez hace al país más vulnerable ante inundaciones y desplazamientos de tierras.⁴

Para muchos afganos la expulsión representa una quiebra en sus vidas. En torno a una cuarta parte de los refugiados son menores de 28 años y nacidos en Pakistán, por lo que tienen muy pocos vínculos con su país de origen

Los treinta años de conflicto han sembrado además la desconfianza entre comunidades, han fortalecido a los “señores de la guerra” a costa de los líderes tribales y han radicalizado a los jóvenes en los campos de refugiados. Durante décadas, los sucesivos gobiernos de Afganistán se han centrado en combatir guerras y en protegerse de las amenazas que, abierta o soterradamente, llegaban del exterior, y se han ignorado los problemas medioambientales. El deterioro del medio ambiente se ha agravado por el colapso de las estructuras de gobierno local o nacional y la ausencia de políticas adecuadas.

La presión sobre los recursos incrementa a su vez la probabilidad de conflictos intracomunitarios. En junio pasado estalló un nuevo episodio de hostilidades por el acceso a tierras y pastos entre los nómadas kuchis –pastunes– y los habitantes de la etnia hazara del distrito de Behsud, en la provincia central de Wardak, que se resolvió cuando intervino el Gobierno central estipulando cómo se repartiría el acceso a los recursos.

El conflicto en Afganistán tiene también otras repercusiones menos visibles, pero igualmente preocupantes para la población civil. Después de seis años del inicio de la interven-

⁴ Datos recogidos en el informe *Sustainable Land Management 2007*, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Afganistán, y citados en *Afganistán: Environmental crisis looms as conflict goes on*, IRIN, 30 de julio de 2007.

La presión
sobre los
recursos
incrementa
la
probabilidad
de
conflictos
intracomu-
nitarios

ción internacional, los afganos viven en un entorno inseguro, tanto en lo que se refiere a su seguridad física como alimentaria. Unos 6,5 millones –el 26% de la población– no tienen asegurado el acceso a los alimentos. Paralelamente, la actual escalada de enfrentamientos sirve de caldo de cultivo de actividades criminales. En contraste con la amplia publicidad que reciben los secuestros de extranjeros, los de ciudadanos afganos sufren desde el anonimato el riesgo creciente de convertirse en rehenes con fines únicamente económicos.

La infancia padece especialmente las consecuencias del conflicto y de las actividades delictivas. Además del peligro de ser reclutados como soldados, los niños pueden convertirse en víctimas de abusos sexuales o ser vendidos a otros países. Sólo recientemente se están empezando a conocer las dimensiones del abuso sexual de menores, cuyo riesgo aumenta entre los niños trabajadores. La extrema pobreza y la codicia están alimentando, a su vez, el tráfico de seres humanos desde Afganistán hacia los países del Golfo con fines de servidumbre, narcotráfico o explotación sexual.

Para las mujeres, la polarización de las posiciones en este conflicto significa un recorte drástico de sus libertades y sus derechos –por ejemplo, el acceso a la educación– si viven en zonas controladas por los talibanes, que imponen sus estrictos códigos morales bajo pena de muerte. Esta situación se extiende a las zonas tribales de Pakistán fronterizas con Afganistán, donde los talibanes locales han logrado hacerse con el control y el gobierno de algunas provincias.

Medidas de protección

La ONU ha desarrollado recomendaciones para minimizar las repercusiones de los conflictos armados sobre los civiles. En 1999 se aprobó la primera resolución del Consejo de Seguridad sobre esta materia, la 1265. Desde entonces se han sucedido resoluciones e informes específicos del Secretario General. En su informe de 2005, Kofi Annan enumeraba algunos de los efectos de los conflictos armados sobre los civiles: ataques planificados, desplazamiento, reclutamiento forzado, asesinatos selectivos o indiscriminados, violencia sexual como arma de guerra, mutilaciones y acciones militares que conducen al hambre, la enfermedad y la eliminación de los medios de vida de la población.⁵

⁵ S/2005/740, de 28 de noviembre de 2005.

La Cumbre Mundial celebrada por la Asamblea General de la ONU en 2005 obtuvo un logro importante al adoptar la “responsabilidad de proteger” a las poblaciones del genocidio, la limpieza étnica y los crímenes de guerra y contra la humanidad como principio que guía las acciones de la organización. En la sesión celebrada por el Consejo de Seguridad el pasado junio se pidió aplicar las medidas necesarias para evitar los efectos negativos de los conflictos sobre los civiles. Entre ellas figura ofrecer seguridad a los desplazados internos y a las comunidades de acogida, garantizar el acceso de la ayuda humanitaria, fortalecer el Estado de derecho, proteger a las mujeres y las niñas y prevenir el reclutamiento de niños-soldado, entre otras. Con el fin de minimizar los efectos negativos de los conflictos armados sobre los civiles, la ONU ha empezado a incluir capítulos especiales en los mandatos de sus operaciones de paz, ha revisado el reparto de tareas y responsabilidades entre las diferentes agencias y ha establecido un plan de diez puntos que señala áreas prioritarias de acción. Sin embargo, pese a la relevancia del asunto y su proliferación, Naciones Unidas aún no cuenta con un alto cargo dedicado a las víctimas de la guerra, como ya se reclama desde algunas organizaciones de la sociedad civil.